

## MARCO LEGAL

---

### 2.1 INTRODUCCIÓN

El presente capítulo introduce el marco legal ambiental en el que se desarrollarán las actividades del proyecto de Reemplazo de Líneas Submarinas y Terminal Multiboyas de la Refinería Talara, a ser realizado y operado por Petróleos del Perú S.A. (PETROPERÚ) y establece el marco jurídico sobre el cual ha sido desarrollado el presente Estudio de Impacto Ambiental (EIA). Debemos indicar que el mismo ha sido elaborado conforme a lo dispuesto por el marco legal vigente sobre conservación y protección ambiental del Estado Peruano.

En el presente capítulo se van a tratar los siguientes temas: Marco General de la Legislación Ambiental Peruana, Marco Institucional aplicable al Sector Hidrocarburos y Legislación Ambiental aplicable a las actividades de hidrocarburos, con la finalidad de resaltar y describir brevemente la normativa ambiental en nuestro país, incluyendo los estándares, lineamientos y políticas ambientales de las instituciones mencionadas en el presente capítulo.

### 2.2 MARCO GENERAL DE LA LEGISLACIÓN AMBIENTAL PERUANA

#### 2.2.1 POLÍTICA Y GESTIÓN AMBIENTAL

La Política Nacional Ambiental constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de aplicación de carácter público; que tiene como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, del gobierno regional y del gobierno local; del sector privado y de la sociedad civil, en materia de protección del ambiente y conservación de los recursos naturales, contribuyendo a la descentralización y a la gobernabilidad del país.

Según nuestro marco jurídico vigente, la gestión ambiental es un proceso permanente y continuo, orientado a administrar los intereses, expectativas y recursos relacionados con los objetivos de la Política Nacional Ambiental y alcanzar así, una mejor calidad de vida para la población, el desarrollo de las actividades económicas, el mejoramiento del ambiente urbano y rural, y la conservación del patrimonio natural del país.

La Política Nacional Ambiental está definida en los siguientes artículos de la Constitución Política del Perú de 1993:

*“Artículo 2°. Toda persona tiene derecho:*

*22) A la paz, a la tranquilidad, al disfrute del tiempo libre y al descanso, así como a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado al desarrollo de su vida.”*

*“Artículo 66°. Los recursos naturales, renovables y no renovables, son patrimonio de la Nación. El Estado es soberano en su aprovechamiento.*

*Por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real, sujeto a dicha norma legal.”*

*“Artículo 67°. El Estado determina la política nacional del ambiente. Promueve el uso sostenible de sus recursos naturales.”*

*“Artículo 68°. El Estado está obligado a promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.”*

A través de la Política Nacional Ambiental, aprobada mediante Decreto Supremo N° 012-2009-MINAM, publicada el 23 de Mayo del 2009, se propende al mejoramiento continuo de la calidad de vida de las personas, mediante la protección y recuperación del ambiente y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, garantizando la existencia de ecosistemas viables y funcionales en el largo plazo.<sup>1</sup>

En ese sentido, la Política Nacional Ambiental, se enmarca dentro de lo establecido en los artículos 67° y 68° de la Constitución Política del Perú; así como dentro de lo contenido en los convenios, tratados y declaraciones internacionales suscritos y ratificados por el Perú en materia ambiental. Constituyendo de esta forma uno de los instrumentos de gestión ambiental más importantes y de cumplimiento obligatorio en los niveles del gobierno y de carácter orientador para el sector privado y la sociedad civil, teniendo como objetivo principal alcanzar el desarrollo sostenible del país.

La Política Nacional del Ambiente considera los lineamientos de las políticas públicas establecidos por la Ley N° 29158, Ley Orgánica del Poder Ejecutivo y las disposiciones de la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; define los objetivos prioritarios, lineamientos, contenidos principales y estándares nacionales de obligatorio cumplimiento en materias como diversidad biológica, bosques, cambio climático, residuos sólidos, saneamiento, sustancias químicas, entre otros; principalmente en torno a los Eje de Política N° 1. Conservación y aprovechamiento sostenible de los recursos naturales y de la diversidad biológica; y Eje de Política N° 2. Gestión Integral de la calidad ambiental.

De igual forma, la Política de Estado N° 19 – Desarrollo Sostenible y Gestión Ambiental se encuentra enmarcada en el Grupo de Objetivos para lograr la Competitividad del País con metas hasta el año 2021. Tiene como finalidad fortalecer la institucionalidad de la gestión ambiental mejorando y fortaleciendo la coordinación entre la sociedad civil, la autoridad ambiental nacional, las sectoriales y los niveles regionales y locales, en el marco de un sistema nacional de gestión ambiental.

Asimismo, la Ley General del Ambiente<sup>2</sup> precisa, en su artículo 8°, que *“la Política Nacional Ambiental constituye el conjunto de lineamientos, objetivos, metas, programas e instrumentos de carácter público, que tienen como propósito definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional, como del sector privado y la sociedad civil, en materia ambiental”*.

<sup>1</sup> Decreto Supremo 008-2005-PCM - Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, artículo 4°.

<sup>2</sup> Ley No. 28611, aprobada el 15 de octubre del 2005.

Posteriormente, señala, en su artículo 75.2º que *“Los estudios para proyectos de inversión a nivel de pre-factibilidad, factibilidad y definitivo, a cargo de entidades públicas o privadas, cuya ejecución pueda tener impacto en el ambiente deben considerar los costos necesarios para preservar el ambiente de la localidad en donde se ejecutará el proyecto y de aquellas que pudieran ser afectadas por éste.”*

*PETROPERÚ, coherente con la política ambiental del país, desarrollará sus actividades enmarcándolas en el respeto hacia la persona y el ambiente. Asimismo, mantendrá sus compromisos para el manejo adecuado de los componentes del entorno ambiental y la mitigación de los impactos ambientales negativos durante la ejecución del Proyecto.*

## **2.2.2 NORMATIVA AMBIENTAL GENERAL**

En un sentido amplio, la legislación ambiental comprende todas las normas de los diversos niveles existentes (Tratados Internacionales, Constitución, Leyes, Decretos y Resoluciones, etc.) que directa o indirectamente atañen al mantenimiento de un ambiente adecuado para el desarrollo de la vida. Por esta razón, algunas normas que no han sido aprobadas con una finalidad ambiental directa, pero que tienen efecto sobre el medio ambiente, son de relevancia ambiental.

Estrictamente hablando, la legislación ambiental está conformada por las normas que regulan los elementos que componen el medio ambiente natural (aire, suelos, aguas, recursos naturales, diversidad biológica, etc.) el medio ambiente humano (salud e higiene, residuos sólidos, patrimonio cultural, etc.) y las que se refieren al medio ambiente en su conjunto. A éstas nos referimos como normas ambientales propiamente dichas.

## **2.3 MARCO INSTITUCIONAL**

### **2.3.1. AUTORIDADES COMPETENTES**

La Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada<sup>3</sup> establece las competencias sectoriales de los Ministerios para tratar los asuntos ambientales señalados en Ley General del Ambiente. De acuerdo a lo antes expuesto, el Ministerio de Energía y Minas se constituye en la autoridad competente para tratar los asuntos ambientales relacionados con el proyecto de Reemplazo de Líneas Submarinas y Terminal Multiboyas de la Refinería Talara, a ser desarrollado por PETROPERÚ.

#### **2.3.1.1 COMPETENCIA EN MATERIA AMBIENTAL**

El Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental<sup>4</sup> (SNGA) establece que la competencia del Estado en materia ambiental tiene carácter compartido y es ejercida por autoridades del gobierno nacional, gobiernos regionales y gobiernos locales.

<sup>3</sup> Aprobada mediante Decreto Legislativo 757.

<sup>4</sup> Aprobado por Decreto Supremo N° 008-2005-PCM

Asimismo, el SNGA asegura la coherencia en el ejercicio de las funciones entre los diversos niveles de gobierno y en el interior de cada uno de dichos niveles. La norma señala que la Autoridad Ambiental Nacional es el Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) sin embargo, no se contradice con lo establecido en la Ley Marco para el Crecimiento de la Inversión Privada, la cual señala que es el Ministerio de Energía y Minas, la autoridad competente para tratar los asuntos ambientales relacionados con la actividad.

Debemos indicar que, de acuerdo a lo establecido en la Tercera Disposición Complementaria Final – Fusiones del Decreto Legislativo N° 1013 (y sus modificatorias) se aprueba la fusión del Consejo Nacional del Ambiente (CONAM) en el Ministerio del Ambiente, siendo este último el ente que lo incorpora. En ese sentido, mediante Resolución Ministerial N° 054-2008-MINAM, se declara la desactivación y extinción del CONAM, al haber concluido su fusión con el Ministerio del Ambiente, asumiendo esta entidad la calidad de Autoridad Ambiental Nacional.

### **2.3.1.2 COMPETENCIA EN MATERIA DE REGULACIÓN**

Los Ministerios, sus organismos públicos descentralizados y sus organismos públicos reguladores son responsables de la regulación ambiental de las actividades de aprovechamiento de recursos naturales, productivas, de comercio y de servicios que se encuentran dentro de sus ámbitos de competencia, debiendo complementarse con las competencias de los gobiernos regionales y locales, así como las de la autoridad de salud a nivel nacional.

### **2.3.2 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS (MEM)**

El marco legal<sup>5</sup> ha establecido que la autoridad sectorial competente en asuntos ambientales en el sector es el Ministerio de Energía y Minas, a través de la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos (DGAAE)

La DGAAE tiene como objeto proponer y evaluar la política y normativa necesaria, así como promover la ejecución de actividades orientadas a la conservación y protección del medio ambiente, referidas al desarrollo de actividades energéticas; y promover el fortalecimiento de las relaciones de las empresas sectoriales con la sociedad civil que resulte involucrada con las actividades del sector energético.

En este sentido, la DGAAE evalúa y aprueba, según corresponda, los instrumentos de impacto ambiental a los que se encuentra obligado los titulares de la actividad. Así mismo, la DGAAE norma la evaluación de impactos ambientales y sociales derivados de las actividades del sector y establece las medidas preventivas y correctivas en caso sean necesarias para el control de dichos impactos. También evalúa las denuncias por trasgresión de la normatividad ambiental sectorial vigente, imponiendo las sanciones que el caso amerite.

---

<sup>5</sup> Decreto Supremo N° 053-99-EM - Establecen disposiciones destinadas a uniformizar procedimientos administrativos ante la Dirección General de Asuntos Ambientales.

### 2.3.3 ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN EN ENERGÍA (OSINERGMIN)

El marco legal del OSINERGMIN señala que es el Organismo Fiscalizador de las actividades que desarrollan las empresas de los sectores electricidad, hidrocarburos y minería; asimismo, supervisa el cumplimiento, por toda persona natural o jurídica, de las normas del sector energía y minas<sup>6</sup>.

El OSINERGMIN está encargado de fiscalizar los aspectos legales y técnicos de las actividades de hidrocarburos en el país, así como el cumplimiento de las disposiciones legales y técnicas referidas a la conservación y protección del medio ambiente en el desarrollo de las actividades de hidrocarburos; las mismas que podrán ser ejercidas a través de empresas fiscalizadoras.

El Reglamento de Supervisión de Actividades Energéticas y Mineras señala como función de OSINERGMIN, entre otras, el establecer los principios, criterios, modalidades, sistemas y procedimientos de la Función Supervisora y Supervisora Específica, en el marco de la legislación vigente<sup>7</sup>.

OSINERGMIN, en cuanto a las actividades a ser desarrolladas por PETROPERÚ, fiscaliza las actividades de los supervisados, en materia ambiental, en función a lo aprobado y determinado por la DGAAE, siendo ésta la autoridad en materia ambiental.

### 2.3.4 MINISTERIO DEL MEDIO AMBIENTE (MINAM)

El marco legal<sup>8</sup> establece que el MINAM es el organismo rector del sector ambiental, que desarrolla, dirige, supervisa y ejecuta la política nacional del ambiente. Asimismo, cumple la función de promover la conservación y el uso sostenible de los recursos naturales, la diversidad biológica y las áreas naturales protegidas.

El objeto del MINAM es la conservación del ambiente, de modo tal que se propicie y asegure el uso sostenible, responsable, racional y ético de los recursos naturales y del medio que los sustenta, que permita contribuir al desarrollo integral social, económico y cultural de la persona humana, en permanente armonía con su entorno, y así asegurar a las presentes y futuras generaciones el derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de la vida.

La actividad del MINAM comprende las acciones técnico-normativas de alcance nacional en materia de regulación ambiental, entendiéndose como tal el establecimiento de la política, la normatividad específica, la fiscalización, el control y la potestad sancionadora por el incumplimiento de las normas ambientales en el ámbito de su competencia, la misma que puede ser ejercida a través de sus organismos públicos correspondientes.

Asimismo, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental (SEIA)<sup>9</sup> establece que el SEIA es un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión.

<sup>6</sup> Ley N° 26734 - Ley del Organismo Supervisor de Inversión de Energía y Minería (OSINERGMIN) , Decreto Supremo N° 054-2001-PCM - Reglamento General del Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y sus modificatorias.

<sup>7</sup> Aprobado mediante Resolución de Consejo Directivo Osinergmin N° 324-2007-OS/CD.

<sup>8</sup> Decreto Legislativo N° 1013 – Ley de Creación del Ministerio del Ambiente, aprobado el 14 de mayo de 2008.

<sup>9</sup> Ley N° 27446, publicada el 23 de mayo del 2001.

Esta norma incorpora la obligación de todo proyecto de inversión pública y/o privada que implique actividades, construcciones u obras que puedan causar impactos ambientales negativos de contar con una certificación ambiental, previa a su ejecución. La certificación ambiental es la resolución que emite la autoridad competente aprobando el instrumento de evaluación de impacto ambiental. En el caso referido al sector hidrocarburos, la autoridad competente para aprobar tales instrumentos, es la DGAAE.

Dando cumplimiento a lo establecido en la norma antes citada, el SEIA entró en vigencia con la aprobación del Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental<sup>10</sup>. Antes de la aprobación de dicha norma, las normas ambientales sobre los Estudios de Impacto Ambiental aplicables eran las aprobadas por cada sector. Una vez aprobado el Reglamento de la Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, cada sector debería adecuar sus procedimientos de evaluación de impacto ambiental a las categorías detalladas en la norma y no se podría iniciar ninguna actividad sin contar previamente con la certificación ambiental respectiva.

El SEIA establece 4 niveles funcionales de la gestión ambiental:

1. Nivel I: le corresponde definir y aprobar los principios y objetivos de gestión ambiental. El ejercicio de estas funciones le corresponde a la Presidencia del Consejo de Ministros y al Consejo de Ministros. Los Gobiernos Regionales y Locales (mediante sus órganos máximos de gobierno) cumplen estas funciones.
2. Nivel II: le corresponde coordinar, dirigir, proponer y supervisar la política ambiental, el plan y agenda ambiental, así como conducir el proceso de coordinación y concertación intersectorial. El ejercicio de estas funciones le corresponde al MINAM como Autoridad Ambiental Nacional.
3. Nivel III: le corresponde elaborar propuestas técnicas que se basen en consensos entre las entidades públicas, el sector privado y la sociedad civil. Para el ejercicio de las funciones de este nivel se podrán crear grupos técnicos a cargo del MINAM.
4. Nivel IV: le corresponde ejecutar y controlar las políticas, instrumentos y acciones ambientales. Le corresponde a los diferentes niveles de gobierno el ejercicio de estas funciones.

### **2.3.5 MINISTERIO DE AGRICULTURA (MINAG)**

Mediante Decreto Supremo N° 030-2008-AG del 11 de diciembre de 2008, se aprueba la fusión del INRENA e INADE en el MINAG, siendo éste el ente absorbente, considerando la nueva estructura organizacional del MINAG, aprobada mediante Decreto Supremo N° 031-2008-AG, Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Agricultura, del 11 de diciembre de 2008, la cual comprende la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre, la Dirección de Asuntos Ambientales y la Dirección de Infraestructura Hidráulica.

En ese sentido, debemos indicar lo siguiente:

1. La Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre es la encargada de proponer políticas, estrategias, normas, planes programas y proyectos nacionales relacionados al aprovechamiento sostenible de los recursos forestales y de fauna silvestre, en concordancia con la Política Nacional del Ambiente y la normativa ambiental. A través de la Dirección de Gestión Forestal y de Fauna Silvestre, emite opiniones, dictámenes e informes técnicos en

<sup>10</sup> Aprobado por Decreto Supremo 008-2005-PCM y modificado por Decreto Legislativo N° 1078 del 28 de junio de 2008.

materia de conservación y aprovechamientos sostenible de los recursos forestales, de fauna silvestre y de microorganismos.

2. A su vez, la Dirección General de Asuntos Ambientales Agrarios es la encargada de ejecutar los objetivos y disposiciones del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en el ámbito de su competencia. A través de la Dirección de Gestión Ambiental Agraria, emite opinión en los procedimientos de evaluación de impacto ambiental que le sean referidos por otros sectores o por el Ministerio del Ambiente.

Por lo tanto, le será de aplicación lo dispuesto en el Decreto Supremo N° 056-97-PCM, el cual establece que los EIA y los PAMA de actividades que modifiquen el estado natural de los recursos naturales renovables, agua, suelo, fauna y flora, requerirán una opinión técnica previa del INRENA (ahora MINAG) para su aprobación, respecto del impacto ambiental sobre los recursos naturales.

Debe recordarse que, en caso no se emita el respectivo pronunciamiento técnico en el plazo de 20 días hábiles, será de aplicación lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29060 – Ley del Silencio Administrativo, el cual señala que *“excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas.”*

Asimismo se ha creado la Agencia Nacional del Agua (ANA) a través del Decreto Legislativo N° 997, entidad que absorbió a la Intendencia Recursos Hídricos al haber sido fusionadas. El Decreto Supremo N° 039-2008-AG del 21 de diciembre de 2008, aprueba su Reglamento de Organización y Funciones, el cual establece como funciones de la ANA, entre otras, las siguientes:

1. Ejercer jurisdicción administrativa en materia de aguas, desarrollando acciones de administración, fiscalización, control y vigilancia para asegurar la conservación de las fuentes naturales de agua, los bienes naturales asociados a ésta y de la infraestructura hidráulica pública, ejerciendo para tal efecto la facultad sancionadora y coactiva en el ámbito de su competencia.
2. Otorgar derechos de uso de agua y mantener actualizado el Registro Administrativo de Derechos de Uso de Aguas.

### 2.3.6 INSTITUTO NACIONAL DE CULTURA (INC)

De acuerdo al marco legal<sup>11</sup> respectivo, el INC es responsable de ejecutar la política del Estado en materia cultural. Entre sus funciones se encuentra el formular y ejecutar las políticas y estrategias del Estado en materia de desarrollo cultural, defensa, conservación, difusión e investigación del Patrimonio Cultural de la Nación.

<sup>11</sup> Ley N° 28296 - Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación y el Decreto Supremo N° 017-2003-ED - Reglamento de Organización y Funciones del INC.

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación<sup>12</sup>, reconoce como bien cultural los sitios arqueológicos, estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave o dolo, en la conservación de los bienes del patrimonio cultural de la Nación.

El Texto Único de Procedimientos Administrativos del Instituto Nacional de Cultura<sup>13</sup>, contiene el Procedimiento N° 10 "Autorización para Realizar Proyectos de Evaluación Arqueológica, con Fines de Impacto Ambiental y/o Aprovechamiento de Recursos". La Comisión Nacional Técnica de Arqueología es la encargada de autorizar los estudios necesarios tanto en el área de explotación de canteras, como en el área donde se habilitarán los caminos de acceso para definir la existencia o no de restos arqueológicos, a través de la obtención del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA). Esta Comisión se encarga de proponer sanciones a quienes incumplan con las normas de protección del Patrimonio Arqueológico.

### **2.3.7 MINISTERIO DE SALUD - DIRECCIÓN GENERAL DE SALUD (DIGESA)**

La Dirección General de Salud Ambiental, es el órgano de línea del Ministerio de Salud encargado de normar, supervisar, controlar, evaluar y concertar con los gobiernos regionales, locales y demás componentes del Sistema Nacional de Salud, así como con otros sectores, los aspectos de protección del ambiente, saneamiento básico, higiene alimentaria, control de zoonosis y salud ocupacional.

Conforme a lo establecido en el Reglamento de Organización y Funciones del Ministerio de Salud<sup>14</sup>, las funciones específicas de la Dirección General de Salud Ambiental, son las siguientes:

1. Proponer y hacer cumplir la política nacional de salud ambiental, a fin de controlar los agentes contaminantes y mejorar las condiciones ambientales para la protección de la salud pública.
2. Lograr la articulación y concertación de los planes, programas y proyectos nacionales de salud ambiental.
3. Establecer las normas de salud ambiental y evaluar los resultados de sus objetivos.
4. Conducir la vigilancia de riesgos ambientales y la planificación de medidas de prevención y control.
5. Supervisar el cumplimiento de las normas técnicas en salud ambiental.
6. Lograr en la sociedad la creación de una conciencia en salud ambiental, propiciando su participación en la búsqueda de entornos ambientales saludables que permitan la protección de la salud, el control de los riesgos ambientales y el desarrollo de una mejor calidad de vida de las personas.
7. Lograr que se produzca el permanente desarrollo de las capacidades, habilidades y conocimientos de los recursos humanos en salud ambiental.
8. Desarrollar la investigación aplicada con base en los riesgos ambientales identificados.

<sup>12</sup> Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada el 23 de julio de 2004.

<sup>13</sup> Aprobado por Decreto Supremo N° 022-2002-ED.

<sup>14</sup> Aprobado por Decreto Supremo N° 014-2002-SA, artículo 55°.

### **2.3.8 DIRECCIÓN GENERAL DE CAPITANÍAS Y GUARDACOSTAS (DICAPI)**

La Dirección General de Capitanías y Guardacostas es un Órgano de Línea de la Marina de Guerra del Perú - Ministerio de Defensa; en su condición de Autoridad Marítima, constituye un organismo transectorial, cuya misión tiene como finalidad entre otros aspectos, la protección del medio ambiente en el mar, ríos y lagos, sus recursos y patrimonio nacional.

Esta Dirección desarrolla labores de gestión ambiental orientadas a prevenir la contaminación del mar, ríos y lagos navegables, provenientes de los buques e instalaciones acuáticas. Asimismo, en coordinación con otros sectores involucrados, realiza labores de protección y vigilancia ambiental de la contaminación proveniente de fuentes terrestres.

Tiene asignada por ley, como una de sus funciones, el ejercer control y vigilancia para prevenir y combatir los efectos de la contaminación acuática y en general, de todo aquello que ocasione impactos ambientales en el ámbito de su competencia, con sujeción a las normas nacionales y convenios internacionales sobre la materia, sin perjuicio de las funciones que le corresponda ejercer a otros sectores de la administración pública.

Así también, según lo establecido en la Ley N°. 26620 - Ley de Control y Vigilancia de las Actividades Marítima Fluviales y Lacustre, es responsable del otorgamiento de derecho de uso de áreas acuáticas, incluida la franja ribereña comprendida hasta los cincuenta metros, medidos desde la línea de más alta marea hacia tierra, velando para que las actividades que se proyecte ejecutar en dichas áreas, no generen impactos ambientales negativos.

### **2.3.9 ACUERDOS INTERNACIONALES**

Internacionalmente, existen una serie de regulaciones y acuerdos que norman los asuntos ambientales en las actividades petroleras. A continuación, se presentan dos de los principales acuerdos y convenios internacionales, dentro de los cuales se enmarcan las operaciones petroleras en el ámbito internacional.

- International Convention for the Prevention of Pollution of Sea by Oil, 1954 (OILPOL). Aprobado por Resolución Legislativa N° 12305 (06/05/1955), entró en vigencia desde el 10/05/55.
- International Convention on the Prevention of Pollution from Ships (MARPOL 73/78) Firmado en Londres el 17/02/78, aprobado por D. Ley N° 22954 el 26/03/80.

### **2.3.10 GOBIERNOS REGIONALES**

Los Gobiernos Regionales ejercen sus funciones ambientales sobre la base de sus correspondientes leyes, políticas, normas y planes nacionales, sectoriales y regionales, asegurando el cumplimiento de la Política Nacional Ambiental. La política ambiental regional debe estar articulada con la política y planes de desarrollo regional.

Según el artículo 10° de la Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, los gobiernos regionales tienen competencias compartidas en la evaluación y regulación de actividades económicas y productivas en su ámbito y nivel, correspondientes a los sectores Industria, Comercio,

Turismo, Energía, Hidrocarburos, Minas, Transportes, Comunicaciones y Medio Ambiente. De igual manera tienen competencias específicas para controlar y supervisar el cumplimiento de las normas, contratos, proyectos y estudios en materia ambiental y sobre uso racional de los recursos naturales, en su respectiva jurisdicción.

El artículo 38° del Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental, establece que el Gobierno Regional es responsable de aprobar y ejecutar la Política Ambiental Regional, en el marco de lo establecido por el artículo 53° de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, debiendo implementar el Sistema Regional de Gestión Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional respectiva.

### **2.3.11 GOBIERNOS LOCALES**

En materia de salubridad y salud, las municipalidades provinciales regulan el proceso de disposición final de desechos sólidos, líquidos y vertimientos industriales en el ámbito provincial y, regulan y controlan la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. Las municipalidades distritales son las encargadas de fiscalizar y realizar labores de control respecto de la emisión de humos, gases, ruidos y demás elementos contaminantes de la atmósfera y el ambiente. La Ley N° 27072 - Ley Orgánica de Municipalidades, establece como funciones específicas de las municipalidades provinciales:

1. Promocionar la coordinación estratégica de los planes integrales de desarrollo distrital. Los planes referidos al espacio físico y uso del suelo que emitan las municipalidades distritales deberán sujetarse a los planes y las normas municipales provinciales generales sobre la materia
2. Emitir las normas técnicas generales, en materia de espacio físico y uso del suelo así como sobre protección y conservación del ambiente.
3. Ejercer funciones sobre acondicionamiento territorial.

El Reglamento de la Ley Marco del Sistema de Gestión Ambiental señala, en su artículo 46°, que el Gobierno Local es responsable de aprobar e implementar la Política Ambiental Local, en el marco de lo establecido por su Ley Orgánica, debiendo implementar el Sistema Local de Gestión Ambiental en coordinación con la Comisión Ambiental Regional respectiva.

## **2.4 LEGISLACIÓN AMBIENTAL APLICABLE A ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS**

### **2.4.1 MARCO LEGAL DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL APLICABLE ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS**

La Ley N° 26221 - Ley Orgánica de Hidrocarburos, es la norma base que regula las actividades de hidrocarburos en el territorio nacional. Esta Ley, en su artículo 87°, establece que las personas naturales y jurídicas, nacionales o extranjeras, que desarrollen actividades de hidrocarburos deberán cumplir con las disposiciones sobre protección medio ambiental y, en caso de

incumplimiento, serán pasibles de las sanciones pertinentes impuestas por el OSINERGMIN, estando facultado el Ministerio de Energía y Minas a resolver el contrato respectivo, previo informe del organismo regulador.

A su vez, el Decreto Supremo N° 015-2006-EM, Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos, establece cuáles son los organismos competentes para la aplicación del mismo y determina los requisitos para la presentación de los instrumentos de evaluación de impacto ambiental (EIA, PMA, etc.) Finalmente, aprueba los niveles máximos aceptables de emisiones contaminantes en el aire y el agua.

*PETROPERÚ desarrollara sus actividades cumpliendo con lo dispuesto en la Ley Orgánica de Hidrocarburos y el Reglamento de Protección Ambiental de las Actividades de Hidrocarburos. Asimismo, se someterá a la fiscalización que OSINERGMIN establezca a través de las empresas fiscalizadoras.*

## **2.4.2 CONTENIDO Y APROBACIÓN DE LOS EIA**

La Ley General del Ambiente establece que los Estudios de Impacto Ambiental son instrumentos de gestión que contienen una descripción de la actividad propuesta y de los efectos directos o indirectos previsibles de dicha actividad en el medio ambiente físico y social, a corto y largo plazo, así como la evaluación técnica de los mismos, debiendo indicar las medidas necesarias para evitar o reducir el daño a niveles tolerables, incluyendo un breve resumen del estudio para efectos de ser publicitado.

La Ley N° 27446 - Ley del Sistema Nacional de Evaluación Ambiental, establece un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. Estandariza la evaluación ambiental para los sectores productivos, permitiendo que las autoridades de dichos sectores implementen los mecanismos de revisión de proyectos.

El Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos establece que el responsable de un proyecto deberá presentar, previo al inicio de cualquier actividad de hidrocarburos o ampliación de las mismas, un Estudio de Impacto Ambiental (EIA) realizado por una empresa registrada y calificada por la Dirección General de Asuntos Ambientales Energéticos del Ministerio de Energía y Minas (DGAAE-MEM) Por ello, también se tomará en cuenta lo establecido en el Decreto Supremo N° 053-99-EM<sup>15</sup> en lo referente a la presentación de los diferentes estudios y/o de sus modificaciones. Este estudio incorpora las recomendaciones de las Guías para Elaborar Estudios de Impacto Ambiental y Programas de Adecuación y Manejo Ambiental en el Subsector Hidrocarburos, aprobadas por Resolución Directoral N° 013-95-EM/DGAA, publicada el 31 de marzo de 1995.

El Decreto Supremo N° 003-2000-EM<sup>16</sup> establece que, todos los Estudios de Impacto Ambiental a los que se refiere el artículo 10° del Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de

<sup>15</sup> Establecen disposiciones destinadas a uniformizar procedimientos administrativos ante la Dirección General de Asuntos Ambientales, publicado el 28 de setiembre de 1999.

<sup>16</sup> Decreto Supremo que Precisa que el Plazo Administrativo fijado en el D.S. N° 053-99-EM para la Aprobación de Estudios de Impacto Ambiental, no se considerará dentro de los plazos fijados en el Artículo 22° de la Ley N° 26221, Ley Orgánica de

Hidrocarburos, deberán incluir un Estudio de Impacto Social que contendrá la línea base socioeconómica, los impactos potenciales, tanto en aspectos sociales como económicos y de salud que puedan afectar a las comunidades nativas o campesinas ubicadas dentro del área del proyecto y las medidas a adoptarse en ese caso para prevenir, minimizar o eliminar dichos impactos. El contenido de este EIA cumple con los requisitos establecidos por esta norma.

El Decreto Supremo N° 056-97-PCM<sup>17</sup> establece que los EIA y los PAMA de actividades que modifiquen el estado natural de los recursos naturales renovables, agua, suelo, fauna y flora, requerirán una opinión técnica previa del MINAG (antes INRENA) para su aprobación<sup>18</sup>.

Debe recordarse que, en caso no se emita el pronunciamiento técnico en el plazo de 20 días hábiles, será de aplicación lo dispuesto en la Primera Disposición Transitoria, Complementaria y Final de la Ley N° 29060 – Ley del Silencio Administrativo, el cual señala que *“excepcionalmente, el silencio administrativo negativo será aplicable en aquellos casos en los que se afecte significativamente el interés público, incidiendo en la salud, el medio ambiente, los recursos naturales, la seguridad ciudadana, el sistema financiero y de seguros, el mercado de valores, la defensa comercial; la defensa nacional y el patrimonio histórico cultural de la nación, en aquellos procedimientos trilaterales y en los que generen obligación de dar o hacer del Estado; y autorizaciones para operar casinos de juego y máquinas tragamonedas.”*

## 2.4.3 LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES Y ESTÁNDARES DE CALIDAD

De acuerdo a la normatividad peruana, el proyecto está sujeto a los límites establecidos por la autoridad sectorial para las descargas y el cumplimiento de los niveles o estándares de calidad ambiental.

### 2.4.3.1 CALIDAD DE EFLUENTES Y CUERPO RECEPTOR

La Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338 en su artículo 2°, establece que *“El agua constituye patrimonio de la Nación. El dominio sobre ella es inalienable e imprescriptible. Es un bien de uso público y su administración solo puede ser otorgada y ejercida en armonía con el bien común, la protección ambiental y el interés de la Nación. No hay propiedad privada sobre el agua.”*

La Segunda Disposición Complementaria Transitoria de la Ley de Recursos Hídricos, faculta a la Autoridad Nacional del Agua para dictar las disposiciones requeridas para la implementación de dicha Ley, en tanto se aprueben sus normas reglamentarias.

En ese sentido, mediante Resolución Jefatural N° 0291-2009-ANA, se dictaron disposiciones referidas al otorgamiento de autorizaciones de vertimientos y de reusos de aguas residuales tratadas.

---

Hidrocarburos, para el cumplimiento o desarrollo de las Fases de Exploración y Explotación de Hidrocarburos, publicado el 28 de enero de 2000.

<sup>17</sup> Establecen casos en que aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental y Programas de Adecuación de Manejo Ambiental requerirán la opinión técnica del Instituto Nacional de Recursos Naturales (INRENA), publicado el 19 de noviembre de 1997.

<sup>18</sup> Considerando que mediante Decreto Supremo N° 030-2008-MINAG, se aprueba la fusión del INRENA con el Ministerio de Agricultura, será ésta Entidad quien emita tal opinión favorable.

Utilizando como referencia lo establecido en la Resolución Directoral N° 1152-2005/DIGESA/SA, según la cual las aguas del ámbito de la Refinería Talara, corresponden a la Clase VI; los límites aplicables serán los establecidos en la Resolución Jefatural N° 0291-2009-ANA en su Clase VI (Aguas de zonas de preservación de fauna acuática y pesca recreativa y comercial).

**Cuadro 2-1** Vertimientos y reusos de aguas residuales tratadas

<b>LÍMITES BACTERIOLÓGICOS</b> Entendidos como valor máximo en 80% de 5 ó más muestras mensuales (Valores en NMP/100 mL)						
USOS	I	II	III	IV	V	VI
Coliformes Totales	8.8	20,000	5,000	5,000	1,000	20,000
Coliformes Fecales	0	4,000	1,000	1,000	200	4,000
<b>LÍMITES DE DEMANDA BIOQUÍMICA DE OXÍGENO (DBO) 5 DÍAS, 20°C Y DE OXÍGENO DISUELTO (O.D)</b> Valores en mg/L						
USOS	I	II	III	IV	V	VI
D.B.O	5	5	15	10	10	10
O.D (valor mínimo)	3	3	3	3	5	4
<b>LÍMITES DE SUSTANCIAS POTENCIALMENTE PELIGROSAS</b> Valores en mg/m <sup>3</sup>						
PARÁMETROS	I	II	III	IV	V	VI
Selenio	10	10	50	N.A	5	10
Mercurio	2	2	10	N.A	0.1	0.2
PCB	1	1	1+	N.A	2	2
Esteres Estatales	0.3	0.3	0.3	N.A	0.3	0.3
Cadmio	10	10	50	N.A	0.2	4
Cromo	50	50	1,000	N.A	50	50
Niquel	2	2	1+	N.A	2	**
Cobre	1,000	1,000	500	N.A	10	*
Plomo	50	50	100	N.A	10	30
Zinc	5,000	5,000	25,000	N.A	20	**
Cianuro WAD	80	80	100	N.A		
Cianuro libre				N.A	22	22
Fenoles	0.5	1	1+	N.A	1	100
Sulfuros	1	2	1+	N.A	2	2
Arseénico	100	100	200	N.A	10	50
Nitratos (N)	10	10	100	N.A	N.A	N.A
<b>NOTAS:</b> * Pruebas de 96 horas LC50 multiplicadas por 0.1 ** Pruebas de 96 horas multiplicadas por 0.02 LC50 Dosis letal para provocar 50% de muertes o inmovilización de la especie del BIO ENSAYO 1+ Valores a ser determinados. En caso de sospechar su presencia se aplicará los valores de la columna V provisionalmente. N.A Valor no aplicable.						
<b>PLAGUICIDAS</b> Para cada uso se aplicará como límite, los criterios de calidad de aguas establecidas por el Environmental Protection Agency de los Estados Unidos de Norteamérica						
<b>LÍMITES DE SUSTANCIAS O PARÁMETROS POTENCIALMENTE PERJUDICIALES</b> (Valores en mg/L) (APLICABLES EN LOS USOS I, II, III, IV, V)						
	I	II	III	IV	V	VI
M.E.H (1)	1.5	1.5	0.5	0.2		
S.A.A.M (2)	0.5	0.5	1.0	0.5		
C.A.E (3)	1.5	1.5	5.0	5.0		
C.C.E (4)	0.3	0.3	1.0	1.0		
(1) Material Extractable en Hexano (Grasa Principalmente) (2) Sustancias activas de azul de Metileno (Deficiente principalmente) (3) Extracto de columna de carbón activo por alcohol (Según método de flujo lento) (4) Extracto de columna de carbón activo de Cloroformo (Según método de flujo lento) Respecto a temperatura, el Ministerio de Salud determinará en cada caso, las máximas temperaturas para exposiciones cortas y de promedio semanal.						

La Segunda Disposición Complementaria de la Resolución Jefatural N° 0291-2009-ANA, dispone que las autorizaciones de vertimiento de aguas residuales tratadas en aguas marítimas, deberá presentarse la autorización correspondiente emitida por la DICAPI.

Asimismo, el proyecto cruzará cuerpos de agua, utilizará agua para construcción y campamentos y tendrá descargas de efluentes. Mediante el Decreto Supremo N° 037-2008-PCM, se aprueban los Límites Máximos Permisibles de Efluentes Líquidos para el Subsector Hidrocarburos, la misma que deroga la Resolución Directoral N° 030-96-EM/DGAA – Niveles Máximos Permisibles para efluentes líquidos productos de actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos líquidos y sus productos derivados.

**Cuadro 2-2** Límites máximos permisibles de efluentes líquidos productos de actividades de explotación y comercialización de hidrocarburos líquidos y sus productos derivados (Decreto Supremo N° 037-2008-PCM)

Parámetro Regulado	LÍMITES MÁXIMOS PERMISIBLES (mg/l) (Concentraciones en cualquier momento)
Hidrocarburos Totales de Petróleo (TPH)	20
Cloruro	500 (a ríos, lagos y embalses) 2000 (estuarios)
Cromo Hexavalente	0,1
Cromo Total	0,5
Mercurio	0,02
Cadmio	0,1
Arsénico	0,2
Fenoles para efluentes de refinerías FCC	0,5
Sulfuros para efluentes de refinerías FCC	1,0
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO)	50
Demanda Química de Oxígeno (DQO)	250
Cloro residual	0,2
Nitrógeno amoniacal	40
Coliformes totales (NMP/100 ml)	Menor que 1000
Coliformes Fecales (NMP/100 ml)	Menor que 400
Fósforo	2,0
Bario	5,0
pH	6,0 – 9,0
Aceites y grasas	20
Plomo	0,1
Incremento de Temperatura*	Menor que 3° C

El Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM, publicado el 31 de julio de 2008, aprueba los Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua, con el objetivo de establecer el nivel de concentración o el grado de elementos, sustancias o parámetros físicos, químicos y biológicos presentes en el agua, en su condición de cuerpo receptor y componente básico de los ecosistemas acuáticos. Los mismos son obligatorios en el diseño de las normas legales, siendo un referente obligatorio en el diseño y aplicación de todos los instrumentos de gestión ambiental (Cuadro 3-3).

**Cuadro 2-3** Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Agua (Decreto Supremo N° 002-2008-MINAM)

**CATEGORÍA 4: CONSERVACIÓN DEL AMBIENTE ACUÁTICO**

PARÁMETROS	UNIDADES	LAGUNAS Y LAGOS	RÍOS		ECOSISTEMAS MARINO COSTEROS	
			COSTA Y SIERRA	SELVA	ESTUARIOS	MARINOS
FÍSICOS Y QUÍMICOS						
Aceites y grasas	mg/L	Ausencia de película visible	Ausencia de película visible	Ausencia de película visible	1	1
Demanda Bioquímica de Oxígeno (DBO5)	mg/L	<5	<10	<10	15	10
Nitrógeno Amoniacal	mg/L	<0,02	0,02	0,05	0,05	0,08
Temperatura	Celsius					delta 3 °C
Oxígeno Disuelto	mg/L	≥5	≥5	≥5	≥4	≥4
pH	unidad	6,5-8,5	6,5-8,5		6,8-8,5	6,8 - 8,5
Sólidos Disueltos Totales	mg/L	500	500	500	500	
Sólidos Suspensos Totales	mg/L	≤25	≤25 - 100	≤25 - 400	≤25-100	30,00
INORGÁNICOS						
Arsénico	mg/L	0,01	0,05	0,05	0,05	0,05
Bario	mg/L	0,7	0,7	1	1	---
Cadmio	mg/L	0,004	0,004	0,004	0,005	0,005
Cianuro Libre	mg/L	0,022	0,022	0,022	0,022	---
Clorofila A	mg/L	10	---	---	---	---
Cobre	mg/L	0,02	0,02	0,02	0,05	0,05
Cromo VI	mg/L	0,05	0,05	0,05	0,05	0,05
Fenoles	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,001	
Fosfatos Total	mg/L	0,4	0,5	0,5	0,5	0,031 - 0,093
Hidrocarburos de Petróleo Aromáticos Totales	Ausente				Ausente	Ausente
Mercurio	mg/L	0,0001	0,0001	0,0001	0,001	0,0001
Nitratos (N-NO3)	mg/L	5	10	10	10	0,07 - 0,28
INORGÁNICOS						
Nitrógeno Total	mg/L	1,6	1,5		---	---
Níquel	mg/L	0,025	0,025	0,025	0,002	0,0082
Plomo	mg/L	0,001	0,001	0,001	0,0081	0,0081
Silicatos	mg/L	---	---	---	---	0,14-0,7
Sulfuro de Hidrógeno ( H2S indisoluble)	mg/L	0,002	0,002	0,002	0,002	0,06
Zinc	mg/L	0,03	0,03	0,3	0,03	0,081
MICROBIOLÓGICOS						
Coliformes Termotolerantes	(NMP/100mL)	1 000	2 000		1 000	≤30
Coliformes Totales	(NMP/100mL)	2 000	3 000		2 000	

NOTA : Aquellos parámetros que no tienen valor asignado se debe reportar cuando se dispone de análisis

Dureza: Medir "dureza" del agua muestreada para contribuir en la interpretación de los datos (método/técnica recomendada: APHA-AWWA-WPCF 2340C)

Nitrógeno total: Equivalente a la suma del nitrógeno Kjeldahl total (Nitrógeno orgánico y amoniacal), nitrógeno en forma de nitrato y nitrógeno en forma de nitrito (NO)

Amonio: Como NH3 no ionizado

NMP/100 mL: Número más probable de 100 mL

Ausente: No deben estar presentes a concentraciones que sean detectables por olor, que afecten a los organismos acuáticos comestibles, que puedan formar depósitos de sedimentos en las orillas o en el fondo, que puedan ser detectados como películas visibles en la superficie o que sean nocivos a los organismos acuáticos presentes.

#### 2.4.3.2 CALIDAD DE AIRE Y EMISIONES

El sector energía no ha establecido límites máximos permisibles para las emisiones generadas por las actividades de hidrocarburos. El proyecto generará durante la construcción emisiones de generadores en campamentos y por transporte de insumos y maquinarias. Estas emisiones están reguladas por el Decreto Supremo N° 047-2001-MTC. Durante el periodo de operación, habrá emisiones mínimas generadas a partir de algunos vehículos y maquinarias.

En relación a la calidad del aire, el Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos establece los límites recomendados para Hidrocarburos (promedio 24 horas) los que se presentan en el cuadro 3-4. El Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire<sup>19</sup>, establece los valores límites de calidad ambiental del aire y los valores de tránsito, que son presentados en el Cuadro 3-5.

<sup>19</sup> Decreto Supremo N° 074-2001-PCM del 24 de junio de 2001

**Cuadro 2-4** Límites recomendados para hidrocarburos (Decreto Supremo N° 015-2006-EM)

Parámetro	Límites Recomendados
Hidrocarburos, promedio 24 h	15 000 ug/m <sup>3</sup>

**Cuadro 2-5** Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad de Aire (Decreto Supremo N° 074-2001-PCM)

Contaminantes	Período	Forma del Estándar		Método de Análisis (1)
		Valor (ug/m <sup>3</sup> )	Formato	
Dióxido de Azufre	Anual	80	Media aritmética anual	Fluorescencia UV (método automático)
	24 horas	365	NE más de 1 vez al año	
PM-10	Anual	50	Media aritmética anual	Fluorescencia UV (método automático)
	24 horas	150	NE más de 3 veces al año	
Monóxido de Carbono	8 horas	10 000	Promedio móvil	Infrarrojo no dispersivo (NDIR) (Método Automático)
	1 hora	30 000	NE más de 1 vez al año	
Dióxido de Nitrógeno	Anual	100	Promedio aritmético anual	Quimiluminiscencia (Método automático)
	1 hora	200	NE más de 24 veces al año	
Ozono	8 horas	120	NE más de 24 veces al año	Fotometría UV (método automático)
Plomo	Anual <sup>2</sup>	0,5	Promedio aritmético de los valores mensuales.	Método para PM 10 (espectrofotometría de absorción atómica)
	Mensual	1,5	NE más de 4 veces al año	
Sulfuro de Hidrógeno	24 horas <sup>3</sup>			Fluorescencia UV (método automático)

Todos los valores son concentraciones en microgramos por metro cúbico.

NE No Exceder.

1 O método equivalente aprobado.

2 DS N° 069-2003

3 A ser determinado

Asimismo, mediante Decreto Supremo N° 003-2008-EM, se aprobaron nuevos Estándares de Calidad Ambiental para Aire para el Dióxido de Azufre, los que entrarán en vigencia a partir del uno de enero de 2009, así como establece Estándares de Calidad de Aire para Benceno, Hidrocarburos Totales, Material Particulado con diámetro menor a 2,5 micras e Hidrógeno Sulfurado.

**Cuadro 2-6** Estándares Nacionales de Calidad de Aire – Dióxido de Azufre (Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM)

Parámetro	Período	Valor $\mu\text{g}/\text{m}^3$	Vigencia	Formato	Método de análisis
Dióxido de azufre ( $\text{SO}_2$ )	24 Horas	80	1 de Enero del 2009	Media Aritmética	Fluorescencia UV (método automático)
	24 Horas	20	1 de enero del 2014		

**Cuadro 2-7** Estándares Nacionales de Calidad de Aire para Benceno, Hidrocarburos Totales, Material Particulado e Hidrógeno Sulfurado (Decreto Supremo N° 003-2008-MINAM)

Parámetro	Período	Valor	Vigencia	Formato	Método de análisis
Benceno <sup>1</sup>	Anual	4 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	01 de enero de 2010	Media Aritmética	Cromatografía de gases
		2 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	01 de enero de 2014		
Hidrocarburos Totales (HT) expresado como Hexano	24 horas	100 $\text{mg}/\text{m}^3$	01 de enero de 2010	Media Aritmética	Ionización de la llama de hidrógeno
Material Particulado con diámetro menor a 2,5 micras ( $\text{PM}_{2.5}$ )	24 horas	50 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	01 de enero de 2010	Media Aritmética	Separación inercial filtración (gravimetría)
	24 Horas	25 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	01 de enero de 2014	Media Aritmética	Separación Inercial filtración (Gravimetría)
Hidrógeno Sulfurado ( $\text{H}_2\text{S}$ )	24 Horas	150 $\mu\text{g}/\text{m}^3$	01 de enero de 2009	Media Aritmética	Fluorescencia UV (Método automático)

<sup>1</sup> Único Compuesto Orgánico Volátil regulado (COV)

### 2.4.3.3 ESTÁNDARES Y LÍMITES PERMISIBLES PARA RUIDO AMBIENTAL

El sector hidrocarburos actualmente no cuenta con límites máximos permisibles para los niveles de ruido.

Mediante Decreto Supremo N° 085-2003-PCM del 30 de octubre de 2003, se aprobó el Reglamento de Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido. Esta norma legal tiene por objetivo proteger la salud, mejorar la calidad de vida de población y promover el desarrollo sostenible. El Cuadro 3-8 presenta los estándares de calidad ambiental para ruido.

**Cuadro 2-8** Estándares Nacionales de Calidad Ambiental para Ruido

Zonas de Aplicación	Valores Expresados en $L_{Aeq}$	
	Horario Diurno	Horario Nocturno
Protección Especial	50	40
Residencial	60	50
Comercial	70	60
Industrial	80	70

Horario Diurno: Período comprendido desde las 07:01 horas hasta las 22.00 horas.

Horario Nocturno: Período comprendido desde las 22:01 horas hasta las 07.00 horas del día siguiente.

## 2.4.4 PROTECCIÓN DE ESPECIES

El artículo 67° y 68° de la Constitución Política del Perú recogen la obligación del Estado de promover el uso sostenible de los recursos naturales que conforman el Patrimonio Natural de la Nación; así como promover la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas.

La Ley N° 26839 - Ley sobre la Conservación y Aprovechamiento Sostenible de la Diversidad Biológica norma los aspectos relativos a la conservación de la diversidad biológica y la utilización sostenible de sus componentes, a través de la promoción la conservación de la diversidad de ecosistemas, especies y genes, el mantenimiento de los procesos ecológicos esenciales, la participación justa y equitativa de los beneficios que se deriven de la utilización de la diversidad biológica y el desarrollo económico del país basado en el uso sostenible de sus componentes.

Esta Ley se encuentra en concordancia con el Convenio de las Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica aprobado mediante la Resolución Legislativa N° 26181; cuyos objetivos son "la conservación de la biodiversidad, el uso sostenible de sus componentes y la participación justa y equitativa de los beneficios resultantes de la utilización de los recursos genéticos".

El Ministerio de Agricultura, a través de la Dirección General Forestal y de Fauna Silvestre es el encargado de proteger la diversidad biológica silvestre. Mediante Decreto Supremo N° 034-2004-AG – Categorización de especies amenazadas de Fauna Silvestre, el Estado Peruano aprobó la categorización, distribuidas en las siguientes categorías<sup>20</sup>: En Peligro Crítico (CR), En Peligro (EN), Vulnerable (VU), Casi amenazada (NT), en el marco de la Estrategia Nacional de la Diversidad Biológica del Perú que reconoce la necesidad de medidas especiales para lograr la supervivencia de especies amenazadas y sus hábitats naturales.

<sup>20</sup> Esta norma deroga al Decreto Supremo N° 013-99-AG, en cumplimiento del artículo 258 del Reglamento de la Ley Forestal y de Fauna Silvestre el cual señala que el INRENA debe elaborar y actualizar cada tres años la clasificación de especies de flora y fauna en función de su estado de conservación, para cual toma como referencia procedimientos internacionales reconocidos aceptados. Para la elaboración del Decreto Supremo N° 034-2004-AG, se utilizó como base los criterios de la UICN, siendo este el resultado de un proceso participativo con diferentes investigadores y especialistas

- Especie en Peligro Crítico.- Una especie o taxón está en Peligro Crítico cuando enfrenta un riesgo extremadamente alto de extinción en estado silvestre en el futuro inmediato.
- Especie en Situación Vulnerable.- Una especie o taxón se encuentra en situación vulnerable cuando corre un alto riesgo de extinguirse en estado silvestre a mediano plazo o si los factores que determinan esta amenaza se incrementan o continúan actuando. Respecto a las otras dos categorías (Especies en Peligro y Especies casi amenazadas), al no darse una definición ni en el Reglamento de la Ley Forestal ni en el Decreto Supremo N° 034-2004-AG, sólo cabe realizar una inferencia sobre su contenido a partir del listado de fauna silvestre contenido en el Anexo del mismo Decreto Supremo N° 034-2004-AG.

## 2.4.5 PROTECCIÓN DE PATRIMONIO CULTURAL

La Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación<sup>21</sup>, reconoce como bien cultural los sitios arqueológicos, estipulando sanciones administrativas por caso de negligencia grave o dolo, en la conservación de los bienes del patrimonio cultural de la Nación.

Así mismo, el Reglamento de Investigaciones Arqueológicas establece la clasificación del patrimonio cultural y de los monumentos arqueológicos. Además, señala los aspectos básicos de las modalidades de investigaciones arqueológicas, de proyectos arqueológicos y de las autorizaciones para proyectos de evaluaciones arqueológicas. Estos últimos, son los originados por la afectación de obras públicas, privadas o causas naturales. El Decreto Supremo N° 004-2009-ED y Decreto Supremo N° 009-2009-ED establecen los requisitos y plazos para la emisión del Certificado de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).

## 2.4.6 USO Y CALIDAD DE AGUAS

La Ley General del Ambiente establece que el aprovechamiento sostenible y control de las aguas continentales es promovido por el Estado, a través de una gestión integrada del recurso hídrico. Previene la afectación de su calidad ambiental y condiciones ambientales de su entorno, como parte del ecosistema donde se encuentran.

La Ley N° 26821 - Ley Orgánica para el Aprovechamiento Sostenible de los Recursos Naturales (25 de junio de 1997) norma el régimen de aprovechamiento sostenible de los recursos naturales, estableciendo sus condiciones y las modalidades de otorgamiento a particulares, en cumplimiento del mandato contenido en la Constitución Política del Estado y la Ley General del Ambiente.

La Ley General de Aguas prohíbe verter o emitir cualquier residuo sólido, líquido o gaseoso que pueda contaminar las aguas y que cause daños, ponga en peligro la salud humana, el normal desarrollo de la flora o fauna o comprometa su empleo para otros usos. La ley establece que nadie podrá variar el régimen, naturaleza o calidad de las aguas sin la correspondiente autorización y en ningún caso, si con ello se perjudica la salud pública o se causa daño a la colectividad o a los recursos naturales. La Autoridad Sanitaria establece los límites de concentración permisibles de sustancias nocivas que pueden contener las aguas según el uso a que se le destinen.

Para la utilización de aguas superficiales, el proyecto requerirá, conforme el Título IV de la Ley de Recursos Hídricos, Ley N° 29338, la autorización expedida por el Administrador Local de Agua. Para la descarga de aguas tratadas, la Ley de Recursos Hídricos establece que se debe pedir autorización a la Autoridad Nacional de Agua, quien emitirá la autorización previa opinión favorable de la autoridad sanitaria que, para estos efectos es la Dirección General de Salud Ambiental (DIGESA).

PETROPERÚ, para efecto de uso de aguas que demande el proyecto, realizará las gestiones correspondientes ante la Autoridad Competente de la jurisdicción (Administrador Local de Agua).

Así mismo, tiene previsto efectuar tratamiento físico, químico y biológico de las aguas servidas de los campamentos, y éstas no constituirán un riesgo potencial para la salud de los pobladores, las

---

<sup>21</sup> Ley N° 28296 – Ley General del Patrimonio Cultural de la Nación, publicada el 23 de julio de 2004.

especies hidrobiológicas ni para los animales silvestres y domésticos que habitan en el área de influencia.

#### **2.4.7 SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE**

La Ley N° 26842, Ley General de Salud, establece que la protección de la salud es de interés público, que es un derecho irrenunciable y que el ejercicio de la libertad de trabajo, empresa, comercio e industria se encuentran sujetos a las limitaciones que establece la ley en resguardo de la salud pública.

A su vez, la Ley N° 26221 – Ley Orgánica de Hidrocarburos dispone que el concesionario esté obligado a salvaguardar el interés nacional y atender la seguridad y salud de sus trabajadores. Por ello, las actividades de hidrocarburos se deberán realizar teniendo en consideración los principios técnicos de seguridad, generalmente aceptados y utilizados por la industria internacional de hidrocarburos.

El Decreto Supremo N° 043-2007-EM aprueba el Reglamento de Seguridad para las actividades de hidrocarburos, debemos precisar que el Reglamento es de aplicación a todas las operaciones e instalaciones de hidrocarburos, de las Empresas Autorizadas y de los Consumidores Directos, en lo que les corresponda respecto a sus instalaciones. Se aplica, además, a las actividades de exploración, explotación, procesamiento, almacenamiento, distribución, transporte y comercialización de hidrocarburos y de sus productos derivados. Asimismo se debe tener en consideración las obligaciones establecidas en el Decreto Supremo N° 42-F Reglamento de Seguridad Industrial.

El Reglamento establece las normas y disposiciones de Seguridad e Higiene para las Actividades de Hidrocarburos, deroga la Resolución Ministerial N° 0664-78-EM/DGH que aprobó el Reglamento de Seguridad en la Industria del Petróleo, precisa los procedimientos para la aplicación de las Normas de Seguridad, complementando y reemplazando, en algunos casos, a las normas establecidas en otros reglamentos del sector hidrocarburos y realiza una clasificación de los accidentes de trabajo (por el tipo de lesión) y de las enfermedades profesionales (por sus consecuencias).

#### **2.4.8 DISPOSICIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS**

La Ley General del Ambiente, establece que las empresas deben adoptar medidas para el control efectivo de los materiales y sustancias peligrosas intrínsecas a sus actividades, previniendo, controlando y mitigando los eventuales impactos negativos que se generen. Asimismo, dispone que los residuos sólidos, distintos a los de origen doméstico y comercial son de responsabilidad del generador hasta su adecuada disposición final.

La Ley General de Residuos Sólidos<sup>22</sup>, su Reglamento<sup>23</sup> y sus modificatorias, establece los derechos, obligaciones, atribuciones y responsabilidades de la sociedad en su conjunto, para asegurar una gestión y manejo de los residuos sólidos, sanitaria y ambientalmente adecuada, con sujeción a los principios de minimización, prevención de riesgos ambientales y protección de la

<sup>22</sup> Ley N° 27314, publicada el 24 de julio de 2004.

<sup>23</sup> Aprobado por Decreto Supremo N° 057-2004-PCM, publicado el 24 de julio de 2004.

salud y el bienestar de la persona humana. Esta norma se aplica a las actividades, procesos y operaciones de la gestión y manejo de residuos sólidos, desde la generación hasta su disposición final, incluyendo las distintas fuentes de generación de dichos residuos, en los sectores económicos, sociales y de la población. Asimismo, comprende las actividades de internamiento y tránsito por el territorio nacional de residuos sólidos.<sup>24</sup>

La gestión y manejo de los residuos sólidos de origen industrial, que se realicen dentro del ámbito de las áreas productivas e instalaciones industriales son regulados, fiscalizados y sancionados por los ministerios u organismos regulatorios o de fiscalización correspondientes. Se estableció, además, que el Ministerio de Transportes, Comunicaciones, Vivienda y Construcción regula el transporte de los residuos peligrosos mediante la Ley N° 28256.

La Ley General de Residuos Sólidos señala que los generadores de residuos sólidos peligrosos podrán contratar una empresa prestadora de servicios de residuos sólidos, debidamente registrada ante el Ministerio de Salud, la misma que, a partir del recojo, asumirá la responsabilidad por las consecuencias derivadas del manejo de dichos residuos.

El Reglamento de la Ley General de Residuos Sólidos, establece la normativa aplicable y los requerimientos para el manejo de los residuos industriales.

En ese contexto, el artículo 48 del Decreto Supremo N° 015-2006-EM señala que los residuos sólidos en cualquiera de las Actividades de Hidrocarburos serán manejados de manera concordante con la Ley General de Residuos Sólidos y su Reglamento, sus modificatorias, sustitutorias y complementarias. Además señala que, en los casos de Actividades de Hidrocarburos realizadas en áreas de contrato con el Estado donde no se cuente con servicios de empresas prestadoras de servicios de residuos sólidos, se aplicará las siguientes disposiciones:

- Los residuos sólidos orgánicos de origen doméstico serán segregados de los residuos de origen industrial y procesados y/o dispuestos utilizando rellenos sanitarios, incineradores, biodegradación u otros métodos ambientalmente aceptados. Los residuos sólidos inorgánicos no peligrosos deberán ser segregados y reciclados o trasladados y dispuestos en un relleno sanitario.
- Los residuos sólidos peligrosos serán segregados y retirados del área donde se realiza la actividad de Hidrocarburos y dispuestos en un relleno de seguridad, si se realizara almacenamiento temporal de estos residuos se hará en instalaciones que prevengan la contaminación atmosférica, de los suelos y de las aguas, sean superficiales o subterráneas, y su migración por efecto de la lluvia o el viento.
- Las técnicas y el proyecto de relleno sanitario y de seguridad fuera de las zonas de operaciones autorizadas deberán contar con la opinión favorable de la DIGESA, previa a la aprobación del proyecto por la DGAAE. Asimismo los lugares para la disposición final deberán contar con la aprobación de la municipalidad provincial correspondiente y la selección deberá tener en cuenta los efectos de largo plazo, en especial los posteriores a la terminación de la actividad y abandono del área.

<sup>24</sup> La norma establece que no se encuentran comprendidos en su ámbito de aplicación los residuos sólidos de naturaleza radiactiva, cuyo control es de competencia del Instituto Peruano de Energía Nuclear - IPEN, salvo en lo relativo a su internamiento al país, lo cual sí se rige por lo dispuesto en dicha ley.

Se prohíbe disponer residuos industriales o domésticos en los ríos, lagos, lagunas, mares o cualquier otro cuerpo de agua. Sobre el particular, PETROPERÚ, cuenta con programas para el manejo de los residuos domésticos, industriales tóxicos y no tóxicos, cuya implementación evitará propiciar la contaminación de los componentes ambientales que involucra el área de influencia del proyecto. Para el transporte de los residuos peligrosos, se cumplirá con lo dispuesto por el Ministerio de Transportes y Comunicaciones.

#### **2.4.9 PARTICIPACIÓN Y CONSULTA CIUDADANA**

El artículo 2º de la Constitución Política, en sus numerales 5º y 17º, consagra el derecho de acceso a la información pública y el derecho a participar, en forma individual o asociada, en la vida política, económica, social y cultural de la Nación.

La Ley General del Ambiente, en su artículo 46º, dispone que toda persona natural o jurídica, ya sea en forma individual o colectiva, tiene derecho a presentar, de manera responsable, opiniones, posiciones, puntos de vista, observaciones u aportes en los procesos de toma de decisiones de la gestión ambiental y en las políticas y acciones que incidan sobre ella, así como en su posterior ejecución, seguimiento y control.

El Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos<sup>25</sup>, norma la participación de las personas naturales y jurídicas, responsables de proyectos energéticos y autoridades, involucradas en la realización y desarrollo de las actividades energéticas y autoridades, así como desarrollar actividades de información y diálogo con la población involucrada en proyectos energéticos a través del Ministerio de Energía y Minas.

El Decreto Supremo N° 015-2006-EM dispone que la participación ciudadana en la gestión ambiental corresponde al proceso de información y difusión pública sobre las actividades que desarrolla la empresa, las normas que la rigen y los Estudios Ambientales de los proyectos de hidrocarburos; y que permite la recolección de criterios y opiniones de la comunidad sobre el proyecto y sus implicancias ambientales, enriqueciendo de esta manera la información con los conocimientos y experiencias locales y poder así garantizar que, a través de los Estudios Ambientales, se planteen mecanismos adecuados e idóneos para minimizar y mitigar los impactos ambientales en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental.

La participación ciudadana es un proceso de intercambio de información de doble vía, por un lado entre el Estado y el titular que propone un proyecto o actividad y por otro lado la población. El proceso de información y difusión pública tiene como finalidad y, de ser procedente, considerar e incorporar los criterios de la comunidad; este proceso no implica derecho a veto ni es una instancia dirimente<sup>26</sup>. Se desarrollará según lo establecido en la norma de participación ciudadana que para tal efecto se encuentre vigente al momento de la presentación del proyecto.

La participación ciudadana en la Gestión Ambiental corresponde al proceso de información y difusión pública sobre las actividades que desarrollará la empresa, las normas que la rigen y los Estudios Ambientales de los proyectos de Hidrocarburos, que permite la recolección de criterios y opiniones de la comunidad sobre el proyecto y sus implicancias ambientales, enriqueciendo de esta manera la información con los conocimientos y experiencias locales y poder así garantizar el que a

<sup>25</sup> Decreto Supremo N° 012-2008-EM, publicado el 20 de febrero de 2008.

<sup>26</sup> ANDALUZ WESTREICHER, Carlos. Manual de Derecho Ambiental. Lima. Llama Gráfica S.A.C. 2006, Pág. 468.

través de los Estudios Ambientales se planteen mecanismos adecuados e idóneos para minimizar y mitigar los Impactos Ambientales en el correspondiente Plan de Manejo Ambiental<sup>27</sup>.

El Reglamento de Participación Ciudadana para la realización de Actividades de Hidrocarburos tiene como objeto fortalecer los derechos de acceso a la información, a la Participación Ciudadana en la gestión ambiental y social, optimizar la gestión ambiental y social de los Proyectos de Inversión e Hidrocarburos, así como promover las relaciones armoniosas entre las poblaciones, el estado y las empresas<sup>28</sup>.

La norma citada establece que los mecanismos de Participación Ciudadana tienen por objeto la difusión de información y la incorporación de observaciones y opiniones, orientadas a mejorar los procesos de toma de decisiones respecto de los Estudios Ambientales. A su vez, establece que los mecanismos obligatorios durante los procesos de elaboración evaluación de los Estudios Ambientales son:

- Talleres Informativos
- Audiencias Públicas

La Resolución Ministerial N° 571-2008-MEM/DM del 16 de diciembre de 2008, aprueba los Lineamientos para la Participación Ciudadana en las Actividades de Hidrocarburos. El Capítulo II de la citada norma, determina como se llevará a cabo la Participación Ciudadana durante la elaboración y evaluación de estudios ambientales.

El capítulo citado, señala lo siguiente:

1. El proceso de participación ciudadana está a cargo de la DGAAE y se realizará de acuerdo al Plan de Participación Ciudadana propuesto por el Titular del Proyecto y aprobado por la DGAAE.
2. En dicho Plan deberán describirse las acciones y mecanismos dirigidos a informar a la población involucrada acerca del proyecto. En ese sentido, deberá ser presentado antes de iniciar la elaboración del Estudio Ambiental correspondiente.
3. Luego de presentado, la DGAAE tendrá un plazo de 15 días calendarios para pronunciarse sobre el mismo y analizará, entre otros criterios, lo siguiente:
  - 3.1 Los mecanismos obligatorios y complementarios que se emplearán, tomando en consideración la eficacia de los mismos para promover una efectiva Participación Ciudadana.
  - 3.2 El Cronograma para la ejecución de los mecanismos dispuestos en el Plan de Participación Ciudadana, considerando los periodos de convocatoria y recepción de observaciones y sugerencias de la ciudadanía y de las autoridades.
  - 3.3 Los medios de comunicación necesarios para la difusión de información sobre el proceso de Participación Ciudadana y las Actividades de Hidrocarburos objeto de éste.
  - 3.4 Los lugares y demás condiciones relevantes para el desarrollo del proceso de Participación Ciudadana.

<sup>27</sup> Decreto Supremo N° 015-2006-EM – Reglamento para la Protección Ambiental en las Actividades de Hidrocarburos. Artículo 37°

<sup>28</sup> Decreto Supremo N° 012-2008-EM, publicado el 20 de febrero de 2008.

- 3.5 Los responsables del proceso en representación del Titular del Proyecto y los mecanismos para atender oportunamente las observaciones o quejas de los pobladores.

Finalmente, el Área de Influencia Directa e Indirecta para la Participación Ciudadana y los criterios utilizados para tal fin, en la etapa de elaboración y evaluación de los Estudios Ambientales, deberá ser determinada en el Plan de Participación Ciudadana. En ese sentido, deberá tomarse como referencia los impactos que pueden ocurrir sobre la flora, fauna, agua, aire, poblaciones, paisajes, restos arqueológicos, entre otros, como consecuencia del desarrollo de la actividad de hidrocarburos.

#### **2.4.10 FISCALIZACIÓN Y SANCIONES**

La fiscalización comprende las acciones de vigilancia, control, seguimiento, verificación y otras similares, que realiza la autoridad ambiental nacional y las demás autoridades competentes a fin de asegurar el cumplimiento de las normas y obligaciones establecidas en la Ley General del Ambiente, así como en sus normas complementarias y reglamentarias.

Las personas naturales o jurídicas que infrinjan las disposiciones contenidas en el Decreto Supremo N° 015-2006-EM, sus normas complementarias y de las disposiciones o regulaciones derivadas de la aplicación del decreto citado, serán pasibles de sanciones administrativas por parte de OSINERGMIN, teniendo en cuenta la magnitud y gravedad del daño ambiental así como los antecedentes ambientales del infractor.

En el caso de que el desarrollo de la actividad fuera capaz de causar un daño irreversible con peligro grave para el medio ambiente, la vida o la salud de la población, la autoridad sectorial competente podrá suspender los permisos, licencias o autorizaciones que hubiera otorgado para el efecto.

La Resolución Ministerial N°. 087-2001-EM/VME establece que para los fines de la compensación de los daños a los afectados por derrames u otros daños al medio ambiente, el MEM establecerá en cada caso, los procesos necesarios para la evaluación de daños y la determinación de las indemnizaciones a los afectados.

La Ley General del Ambiente establece que toda persona tiene derecho a conocer el estado de las denuncias que presente ante cualquier entidad pública respecto de riesgos o daños al ambiente y sus demás componentes, en especial aquellos vinculados a daños o riesgos a la salud de las personas. En caso de que la denuncia haya sido trasladada a otra autoridad, en razón de las funciones y atribuciones legalmente establecidas, se debe dar cuenta inmediata de tal hecho al denunciante.

Asimismo, la Ley del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, cuyo objeto es la creación del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, estará a cargo del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental - OEFA, el mismo que desarrollará su gestión como ente rector del mencionado sistema. En ese sentido, se ha establecido que dicho sistema rige para toda persona natural o jurídica, pública o privada, principalmente para las entidades del Gobierno Nacional, regional y local que ejerzan funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental.

La finalidad de este sistema reside en el aseguramiento del cumplimiento de la legislación ambiental por parte de todas las personas naturales o jurídicas, así como supervisar y garantizar que las funciones de evaluación, supervisión, fiscalización, control y potestad sancionadora en materia ambiental, a cargo de las diversas entidades del Estado, se realicen de manera independiente, imparcial, ágil y eficiente, de acuerdo con lo dispuesto en la Ley N° 28245, Ley Marco del Sistema Nacional de Gestión Ambiental, en la Ley N° 28611, Ley General del Ambiente; en la Política Nacional del Ambiente; y demás normas, políticas, planes estrategias, programas y acciones destinados a coadyuvar a la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales, al desarrollo de las actividades productivas y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales que contribuyan a una efectiva gestión y protección del ambiente.

Finalmente, mediante esta Ley se ha establecido que las autoridades competentes que forman parte del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental son:

- a) El Ministerio del Ambiente (MINAM), que como ente rector del sector ambiental desarrollará, dirigirá, supervisará y ejecutará la política nacional ambiental, y ejercerá las funciones que le asigna su ley de creación, Decreto Legislativo N° 1013, y demás normas aplicables.
- b) El Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA), el cual es un organismo público técnico especializado, con personería jurídica de derecho público interno, que constituye un pliego presupuestal; además, de encontrarse adscrito al MINAM, que se encarga de la fiscalización, supervisión, evaluación, control y sanción en materia ambiental, así como de la aplicación de los incentivos, y ejerce las funciones previstas en el Decreto Legislativo N° 1013 y la presente ley. El OEFA es el ente rector del Sistema de Evaluación y Fiscalización Ambiental.
- c) Entidades de fiscalización ambiental nacional, regional o local, los cuales tienen facultades expresas para desarrollar funciones de fiscalización ambiental, y ejercen sus competencias con independencia funcional del OEFA. Estas entidades forman parte del Sistema Nacional de Evaluación Y fiscalización Ambiental y sujetan su actuación a las normas de la ley y otras normas en materia ambiental, así como a las disposiciones que dicte el OEFA como ente rector del referido sistema.

## 2.4.11 USO DE TIERRAS

La Ley General del Ambiente establece que son objetivos de la gestión ambiental en materia de calidad ambiental preservar, conservar, mejorar y restaurar, según corresponda, la calidad de los suelos. Además, dispone que el Estado sea el responsable de promover y regular el uso sostenible del recurso suelo, buscando prevenir o reducir su pérdida y deterioro por erosión o contaminación.

El Decreto Supremo N° 033-85-AG<sup>29</sup> - Reglamento para el levantamiento de suelos establece las normas y metodología a aplicarse, según los niveles de estudio, para la ejecución, revisión y aprobación de los levantamientos de suelos a que obligatoriamente deben sujetarse las personas naturales o jurídicas, nacionales y extranjeras que realicen esta actividad y que se denominarán Ente Ejecutor.

A su vez, el artículo 2° señala que todo levantamiento de suelos que realice un Ente Ejecutor, para tener validez técnico-jurídica se sujetará a las normas establecidas en el Reglamento y deberá ser

<sup>29</sup> Publicada el 23 de abril de 1985.

avalada por profesionales especialistas en la materia, debidamente inscritos en el Colegio de Ingenieros del Perú (CIP) y el Registro que para tal efecto llevará la Dirección General de Aguas, Suelos e Irrigaciones del Ministerio de Agricultura.

La capacidad de uso mayor de los suelos se determinó siguiendo las pautas del Reglamento de Clasificación de Tierras del Ministerio de Agricultura (Decreto Supremo N° 017-2009-AG). Este reglamento considera tres categorías: grupos de capacidad de uso mayor; clases de capacidad de Uso Mayor y subclases de capacidad de Uso Mayor.